

‘El progreso no puede llegar a La Guajira sin agua ni energía’

Tras una semana de gobierno en el departamento, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, habló de los avances y retos relacionados con la transición energética.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO-REDACCIÓN POLÍTICA | @JuanLombo | jualom@eltiempo.com

Desde La Guajira, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, tuvo encuentros con las comunidades y firmó pactos para destrabar proyectos de transición energética. FOTO: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



El gobierno de Gustavo Petro despachó por una semana completa desde La Guajira. Una de las carteras que más tuvo que ver con este proceso en el territorio fue el Ministerio de Minas y Energía, a cargo de Irene Vélez. Esta celebró varios encuentros con comunidades de la región y se llevaron a cabo pactos para destrabar los proyectos de transición energética. En diálogo con EL TIEMPO, habló de los logros alcanzados en estos siete días y lo que queda por hacer ante la amplia conflictividad social alrededor de los proyectos de generación energética eólicos y solares en la península.

¿Cuál es el balance de la agenda en La Guajira? ¿Qué se vino a hacer desde el Ministerio de Minas?

Nosotros en muchas ocasiones previas hemos venido a La Guajira y eso permitió que ahorita estuviéramos consolidando resultados. El más importante para nosotros en esta ocasión es el Pacto por la Transición Energética Justa. Eso fue hacer un acuerdo de voluntades con las empresas energéticas, las comunidades indígenas del pueblo wayú, y las autoridades nacionales y locales. Eso trae una construcción previa de un decálogo de unos puntos de acuerdo con las comunidades wayú. Y todo eso apunta a cómo hacemos que haya justicia para las comunidades. Las empresas están dispuestas para facilitar mecanismos para que así sea. Uno de los mecanismos que logramos fue que el comité tripartito—creado inicialmente para que estuvieran empresas, autoridades locales y autoridades nacionales—incluyera la participación wayú. Las comunidades no tenían participación. Es un cambio de relacionamiento social, porque se entiende que deben ser los habitantes los que tengan voz.

Hay comunidades que dicen que no quieren los proyectos, incluso, el martes hablaron con ustedes y se dice que el encuentro fue muy tensionante y por eso fue una puerta cerrada. ¿Qué pasó al fin?

Miren que no. Quienes estuvieron en desacuerdo con los desarrollos de los proyectos participaron del pacto por la transición. En el pacto estuvieron todas las personas que se pudieron meter en el auditorio más grande que tiene La Guajira. Entonces la restricción era logística. Al final estuvieron 140 autoridades, 12 empresas que están haciendo proyectos de transmisión y de generación energética y los gobiernos. Es importante saber que siguen los desafíos. Esta región tiene 40 años de historia extractivista, donde el carbón y el gas no han dejado beneficios. La comunidad sea eso y es a la que se le mueren los niños. Ellos vieron pasar un desarrollo económico de un modelo que no fue equitativo. Las reglas no fueron redistribuidas correctamente y no dejaron bienestar: sea por corrupción o por un mal enfoque. Eso tenemos que cambiarlo y por eso las comunidades piden que esta vez sea diferente. Hay un ángulo y es que los proyectos renovables que se adjudicaron con las subastas de 2019 y 2021 no contemplaban la justicia social y econó-

mica, por eso es que ven una re-petición de los viejos modelos.

¿Y qué va a pasar con esos proyectos?

Esos proyectos tienen unos procesos de consulta previa, libre e informada que ya culminaron. En esos casos se entiende que la autoridad lo aprobó. Esperamos que haya estado bien hecho. Ahora lo que queremos es hacer un acompañamiento para que haya cumplimiento por parte de las empresas y para que el Estado complemente lo que vienen a hacer las empresas. Parte de lo que ha pasado en La Guajira es que el Estado le ha dado la espalda al departamento. La sentencia T-302 dice que hay un estado inconstitucional de cosas y eso tiene que ver con que el Estado no llegó a resolver los problemas estructurales. Por eso nosotros llegamos a hacer algo distinto y creemos que la transición energética es crucial porque es una nueva economía que le puede quedar a La Guajira.

En la visita se alcanzó el 100 por ciento de acuerdos de consulta en el proyecto de la línea Colectora, ¿eso qué implica?

Este es el mejor ejemplo de que lo estamos haciendo bien y que esta política de relacionamiento social y de gobernar con la gente desde el territorio funciona. Cuando yo llegué al Gobierno, este proyecto estaba retrasado y todo el mundo decía que se debía aplicar el test de proporcionalidad o el proyecto fracasaba. Un test significaba que a unas comunidades, las más conflictivas, no se les iba a consultar y eso se hacía cuando no se puede el diálogo. Yo dije que no íbamos a hacer test de proporcionalidad, que eso no era el estilo de un gobierno del cambio. Un ministro liderado por una persona que viene de las ciencias no podía hacer una cosa de esas. Hicimos una gerencia Guajira para acompañar el proceso y nos metimos de cabeza a territorio. Por eso vine acá para buscar destrabar de la mano del Ministerio del Interior. Que hayamos concluido las 235 consultas de Colectora, sobre todo las más difíciles, es un logro tremendo. Estamos diciendo que en La Guajira se puede.

¿Se significa que en todos los proyectos, incluyendo los más conflictivos, van a descartar el test de proporcionalidad?

No se utilizó ningún test de proporcionalidad, es es el logro. Incluso en el caso de Colectora tuvimos casos en los que ha-

IRENE VÉLEZ
ministra de Minas y Energía.



“Ellos vieron pasar un desarrollo económico de un modelo que no fue equitativo. Las regalías no fueron redistribuidas correctamente y no dejaron bienestar: sea por corrupción o por un mal enfoque”.

El Estado no llegó a resolver los problemas estructurales.

Por eso nosotros llegamos a hacer algo distinto y creemos que la transición energética es crucial porque es una nueva economía que le puede quedar a La Guajira.

bia dos autoridades legítimas o sobre un mismo territorio y otras con peleas de sangre. En esos casos logramos acuerdos. Esto es magnífico. Sobre todo, hay que ver que el lunes logramos cerrar la primera negociación que abrimos y que había sido mal manejada. Las formas aplicadas fallaron de tal manera que hicieron la consulta casi imposible: hubo robo de por medio y mala actuación de la Policía. Un montón de errores que hicieron que fuera la penúltima en cerrarse y la logramos porque el Gobierno mismo se sentó a dialogar.

En el Pacto por la Energía hubo un líder, un putchipu, que dijo que hay

una guerra en la Alta Guajira por la transición energética. ¿Cómo van a manejar esta situación de conflictividad social?

Esa autoridad también dijo que los conflictos son anteriores a los proyectos de transición energética. Es decir, hay una conflictividad social en la región y los proyectos lo que hicieron fue avivarlos. Por eso la pregunta es cómo hacer los proyectos para que no sigan aumentando la conflictividad. Entonces, eso pasa por entender y respetar la cultura local. Hay que reconocer que ellos son la autoridad legítima. También hay que entender quiénes son autoridad y quiénes no. Estamos convencidos de que se necesita una presencia integral del Estado. El progreso no puede pasar por La Guajira y que no tengan agua ni energía.

Ustedes hablan de impulsar la transición energética, pero en el Plan Nacional de Desarrollo aumentaron el valor de las transferencias de las empresas de este sector. ¿No es contradictorio?

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) logramos que se ampliara el porcentaje de las transferencias. El esquema de transferencias se hizo durante el gobierno Duque y lo que hizo fue que se distinguiera la generación hidráulica, de seis por ciento, y a las renovables, de uno por ciento. Eso es ventajoso para la empresa, pero desventajoso para las comunidades. En el PND lo que hicimos fue equilibrar nuevamente la balanza y ahora las renovables deben tener el esquema de transferencia de la hidráulica. Lo que queremos hacer es que estas ayuden a solucionar los problemas de empobrecimiento histórico que tenemos en La Guajira.

Hablando de la transición, hay un temor del sector carbonífero, sobre todo de sus trabajadores, por los anuncios de que el plan es acabar la explotación de este mineral. ¿Qué se avanzó en los diálogos con estos sectores en La Guajira?

Hay una crisis climática global. La temperatura oceánica de los últimos 10 años está muy por encima de lo que tenemos hace 50 años. Eso demuestra que la crisis climática es real y concreta. Frente a eso, los países del mundo han tomado la decisión de descarbonización. Eso implica que los productores de carbón no tendremos a quién venderle. Por ejemplo, acabamos de llegar de Alemania, ellos

importan carbón de Colombia desde hace 30 años, y ya nos dijeron que en 2028 todas sus termoeléctricas van a dejar de importar carbón porque van a usar otros energéticos. ¿Qué pasará cuando ya nadie nos compre carbón? Entonces vamos a tener una crisis porque es un energético que se va a desvalorizar. Lo que decimos desde el Gobierno es que frente a esta realidad, necesitamos pensar en la reconversión laboral. De eso hablamos con los sindicalistas mineros. Ellos ya sintieron esa realidad cuando Prodeco entregó sus títulos y dejó sin trabajo a la población. Esa debe ser parte de nuestra transición energética. Creemos que es importante que esto debe entrar en la ley minera. Debemos contemplar el cierre de operaciones, un cierre ambiental y un cierre laboral.

¿En qué se ha avanzado en los temas de hidrógeno verde?

Tenemos una decisión del gobierno alemán de comenzar unas mesas técnicas específicamente entre los ministerios de Energía para que podamos ver los mecanismos por medio de los cuales pudiéramos desarrollar la industria y adecuar los puertos para que hacia 2028 podamos tener exportaciones. Eso me parece muy interesante que donde tengamos el potencial de desarrollar hidrógeno verde, que es aquí en La Guajira, sea el mismo lugar donde ha salido el carbón. Esa fue parte de la discusión del Gobierno alemán. Le dijimos: “Ustedes nos han comprado durante 30 años el carbón de La Guajira, ahora la responsabilidad histórica es que ahora consuman el hidrógeno que puede producirse en el departamento”.

Esta agenda con mineros y comunidades no ha caído bien en sectores de oposición, lo ven como un tema de inmolde electoral ante lo cercano de octubre.

Esta es una política de relacionamiento social que viene desde el principio. Es importante tener un diálogo y gobernar con la gente. Las agendas sociales se deben construir con la gente. Esta es una nueva manera de ser gobierno y hacerlo con el pueblo. Hay sectores a los que no les gusta y que quieren que gobernemos desde Bogotá, pero estar aquí da un contexto absoluto y nos da mucha mayor claridad. Esto nos permite aprender de la gente y creo que esa nueva manera de gobernar es novedosa y tienen unos resultados muy claros de lo que podemos hacer a nivel local.